

Nunca desperdicias una pandemia

Cómo la respuesta del Banco Mundial a la crisis del Covid-19 prioriza al sector privado

La pandemia de Covid-19 ha desencadenado crisis sanitarias, económicas y sociales de proporciones sin precedentes que tienen el potencial de socavar gravemente los (ya lentos) progresos realizados por los países en desarrollo hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las propias cifras del Banco Mundial (BM) sugieren que para 2021 entre 110 y 150 millones de personas más habrán caído en la pobreza extrema, viviendo con menos de USD 1,90 al día. Los impactos de la pandemia de Covid-19 han dado lugar a llamamientos a respuestas ambiciosas, tanto en términos de escala como de políticas, bajo el título general de "reconstruir mejor". Este documento informativo analiza la respuesta del Grupo del Banco Mundial (GBM) a la pandemia de Covid-19 y revela una priorización persistente de los intereses privados sobre el público, tanto en la respuesta inmediata a la pandemia como en la futura. De hecho, el GBM parece haber aprovechado la crisis actual como una oportunidad para intensificar su enfoque de Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo (MFD).

El enfoque MFD, que ha sido implementado por el GBM desde 2017, se basa en estrategias anteriores y representa un esfuerzo sistemático e integral para promover el desarrollo del sector privado. Con él se busca situar al sector privado en el centro del desarrollo, incluso en la prestación de servicios públicos. La idea es que la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) tradicional tome un papel catalizador en la movilización del financiamiento privado para el desarrollo, incluso en los países más pobres. El enfoque despliega varios instrumentos, muchos de los cuales se conocen como "financiamiento mixto". Los instrumentos van desde ofrecer asesoramiento técnico sobre cómo reformar políticas e instituciones en un país y/o sector en particular, hasta tomar posiciones de "primera pérdida de capital" en acuerdos de inversión privada o proporcionar préstamos a agentes del sector privado a tasas subvencionadas.

La agenda del GBM revela la falta de voluntad de la comunidad de donantes de adoptar medidas concretas para ampliar y fortalecer el financiamiento público para el desarrollo y la incapacidad de acordar una resolución multilateral a las deudas soberanas insostenibles. Además, muestra una falta de determinación para crear un organismo mundial que haga frente a la elusión y la evasión fiscal masiva, lo que es muy perjudicial para los países del Sur Global. Los principales donantes e instituciones internacionales no han respondido a un creciente conjunto de literatura y pruebas que ponen en tela de juicio la eficacia de este enfoque y resaltan sus considerables consecuencias negativas. Por último, refleja un perjuicio subyacente fundamental contra el sector público, alimentado por políticas de austeridad que han socavado su capacidad de cumplimiento.

Nuestro análisis destaca cinco puntos:

1. Durante la respuesta inmediata de emergencia, el GBM destinó casi el 60 por ciento de los USD 14.000 millones del Mecanismo de Desembolso Rápido Covid-19 (USD 8.000 millones) a su brazo del sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), en lugar de hacerlo a través de sus brazos del sector público, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), los que recibieron USD 6.000 millones. Esto no responde a los múltiples pedidos del espectro político de fortalecer los sistemas públicos.
2. Los clientes del sector financiero de la CFI y las empresas multinacionales se han beneficiado particularmente de la respuesta a la pandemia. De acuerdo con la información disponible, a fines de junio de 2020, el 68 por ciento (en términos de valor) de los proyectos Covid-19 de la CFI se dirigió a las instituciones financieras. El GBM afirma que esto es para ayudar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYME) a abordar las consecuencias de la pandemia, pero la estrategia aún no ha tenido resultados. Además, alrededor del 50 por ciento de las empresas apoyadas por la CFI pertenecen mayoritariamente a empresas multinacionales o son, ellas mismas, conglomerados internacionales. Existe un alto riesgo de que la respuesta de emergencia de la CFI no haya llegado a los países, sectores y empresas más necesitados de apoyo.

3. La creciente presión de “colocar el dinero” ha planteado claros desafíos de implementación. En particular, el foco de la CFI en las instituciones financieras ha fallado en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas mientras que, por el lado del BM, se han planteado dudas sobre la muy limitada o nula participación de las partes interesadas a medida que se implementan los proyectos. Esto se suma a la reducción del espacio de participación activa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el aumento de las represalias contra los activistas de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales.
4. En cuanto a su relación con los gobiernos, el BM sigue plantado en las reformas estructurales en apoyo de la liberalización y la desregulación. Si bien la mayoría de los préstamos del BM a los Estados, aprobados en el período de respuesta de emergencia, tienen como objetivo abordar la crisis de salud, otros tienen un alcance más amplio e incluyen reformas más tradicionales en apoyo del sector privado. Esto indica un firme y continuo compromiso del BM con un enfoque impulsado por el mercado que, entre otras cosas, ha dado lugar a resultados adversos para la salud e impactos negativos en la igualdad de género.
5. En última instancia, el GBM tiene como objetivo “reconstruir mejor” acelerando y ampliando su apoyo a las soluciones del sector privado. Esto incluye un mayor enfoque en las asociaciones público-privadas (APP) para, ostensiblemente, prestar servicios públicos, a pesar de las pruebas bien documentadas sobre los múltiples riesgos e implicaciones de las APP para el sector público y para los ciudadanos, incluyendo sus altos costos, sus riesgos fiscales, su cuestionable eficacia y sus consecuencias para la equidad.

En una inspección más detallada del enfoque del MFD en un país piloto como Kenia, es evidente que tanto antes como durante la pandemia, el GBM ha perseguido sin descanso un programa de promoción de los intereses del sector privado, incluso en sectores públicos fundamentales como la salud y la educación. Esto plantea serias dudas con respecto a quién se beneficia de esta agenda y a qué costo. De hecho, la aplicación del MFD corre el riesgo de empeorar las desigualdades y amplificar las consecuencias económicas y sociales de la Covid-19.

Recomendaciones sobre políticas

El GBM es una institución pública con un mandato de desarrollo y como tal tiene el deber de actuar por el bien público. Está en juego el paradigma de financiamiento para el desarrollo para la próxima década.

Este documento informativo sugiere recomendaciones de política a corto plazo centradas en la respuesta a la Covid-19 y medidas a largo plazo que permitirían al GBM volver a conectarse con su mandato fundamental, que es reducir.

A corto plazo:

- El GBM debe restablecer el equilibrio entre el sector público y el privado en su respuesta a la Covid-19, incluso en sus modalidades e instrumentos. Los países en desarrollo necesitan recursos concesionales para fortalecer sus sistemas públicos, en particular el de la salud, la educación y la protección social, así como para estimular la recuperación económica.
- Tanto en su respuesta de emergencia como en lo que respecta al financiamiento a largo plazo, el BM debe abandonar las condiciones políticas que socavan las políticas económicas y las medidas regulatorias destinadas a fortalecer las economías, el empleo y los medios de vida nacionales y los derechos cívicos. Esto incluye el abandono de las condiciones políticas que favorecen al sector privado y socavan el fortalecimiento de los servicios públicos y la provisión de los bienes públicos.
- El GBM debe asegurarse de que sus programas de emergencia y a largo plazo sean coherentes con la resiliencia climática y el cambio a modelos bajos en carbono.
- La CFI debe comprometerse divulgar públicamente a los destinatarios finales de su apoyo y para qué se utiliza esta asistencia. Esto garantizaría que los programas de la CFI ayuden a preservar el empleo y no se usen para rescatar a las instituciones financieras privadas.
- La CFI debería detener su apoyo a los centros de salud privados comerciales, que socavan la construcción del sistema público y que posiblemente tengan implicaciones perniciosas para las mujeres, las poblaciones de menores ingresos o vulnerables.

Medidas a largo plazo

Habida cuenta de los problemáticos antecedentes del MFD, el GBM debería reevaluar seriamente este enfoque. Si la institución quiere “reconstruir mejor”, debe considerar las serias consecuencias de su agenda y, en su lugar, avanzar hacia un enfoque basado en los derechos humanos, que fortalezca la resiliencia y los sistemas públicos.

En esencia, esto requerirá que se logren niveles adecuados de financiamiento público mediante, entre otras cosas, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal y el uso de la AOD para fortalecer la prestación de servicios públicos. El GBM, como actor líder en el desarrollo, tiene que desempeñar su papel y repensar su enfoque sobre el financiamiento mixto. La cancelación de los pagos de la deuda debería estar vinculada a un enfoque más amplio sobre la resolución de la crisis de la deuda bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La aplicación de estas medidas permitiría una recuperación equitativa y resiliente en consonancia con los compromisos de los ODS y de París.